

Se termina el país del blanco y negro

En este último tiempo quedó con crudeza al descubierto el difícil escenario económico y social en el que se encuentra inmerso nuestro país, después de más de una década ininterrumpida de políticas erráticas, desmanejos administrativos, corruptelas y abusos de poder.

El camino de la negación explícito en los discursos épicos, la instalación de enemigos imaginarios y la alteración de las estadísticas oficiales, se ha vuelto insostenible frente a la realidad de un proceso de inflación y estancamiento de la actividad económica que, sumado al enraizamiento del flagelo de la inseguridad, está haciendo estragos en el entramado de la sociedad.

Es la expresión cabal del fracaso de un modelo que antepuso el enriquecimiento multimillonario de sus hacedores, a la concreción de transformaciones estructurales capaces de combatir la pobreza y terminar con las terribles desigualdades que -igual que durante los años '90- siguen dramáticamente vigentes.

A contramano de la extendida sensación de agonía que produce un ciclo que se sabe cercano a su fin, las autoridades nacionales han redoblado la apuesta de imponer, sin los mínimos consensos necesarios, decisiones altamente cuestionables con las que buscan profundizar enfrentamientos, apuntalar un dominio desgastado y tejer un entramado de impunidad.

Lejos de asumir la responsabilidad de sentar las bases de una transición ordenada, el gobierno abrazó -por necesidad e impericia- la estrategia de agravar hasta límites inimaginables el conflicto con los fondos buitres y se ha mostrado incapaz de afrontar los cada vez más graves problemas económicos e indiferente a un cuadro social apremiante.

Con esa misma lógica, ha consolidado sus alianzas con algunos regímenes provinciales cuasi-autoritarios y ha forzado el tratamiento parlamentario de un conjunto controvertido de normas cuyas consecuencias son, a esta altura, complicadas de anticipar.

Una ley de abastecimiento que pone en cabeza de un funcionario raso facultades extraordinarias de intervención en las empresas, un código civil que recorta la responsabilidad estatal y niega el derecho al agua potable, una ley de hidrocarburos que rifa nuestros recursos naturales al mejor postor y una modificación del procedimiento penal que procura trabar el avance de las causas de corrupción, son algunos ejemplos deplorables de esta práctica.

Grosero sería el error de las fuerzas que integramos la oposición si nuestra respuesta a este contexto que se avizora enmarañado y oscuro, pasa por la maniobra meramente electoral de juntarse a cualquier precio, fundiendo en un espacio común, identidades, historias y proyectos que son irreconciliables.

En cambio, si de verdad queremos estar a la altura de las circunstancias, tenemos que poder promover compromisos elementales que definan líneas de acción que son indispensables para estabilizar la economía, atender los dramas sociales más urgentes, asegurar la actuación de la justicia y fortalecer la democracia.

Se trata de resignar protagonismo y posiciones, sin renunciar a nuestras convicciones, en aras del bien común. De priorizar el diálogo franco a la confrontación y una mirada de largo plazo a la coyuntura marcada por las especulaciones y apetencias personales de tal o cual dirigente.

Se trata de impulsar una suerte de Pacto de la Moncloa sui generis que con total amplitud, también convoque a sectores de un oficialismo en descomposición, a repensar colectivamente a la Argentina y sentar las bases de un futuro distinto.

Nota de opinión del diputado nacional Roy Cortina, publicada por el Cronista Comercial el 23 de octubre de 2014.